

LAS ASIGNATURAS PENDIENTES DEL MODELO NACIONAL-POPULAR.

El Caso peruano

por Danilo Martuccelli, CNRS-CADIS
y Maristella Svampa, CONICET- UNGS

Tres experiencias nacional-populares trucas han signado la historia del Perú, a lo largo del siglo XX: el avatar del APRA y de Haya de la Torre (desde 1930 hasta fines de los sesenta), el gobierno militar de Velasco Alvarado (1968-1975) y la gestión de Alan García (1985-1990). A la hora de articular un modelo nacional-popular, estas tres experiencias conocieron distintas dificultades. El propósito de este artículo es, sobre todo, dar cuenta del carácter incompleto de estas experiencias nacional-populares, antes que señalar las causas de sus respectivos fracasos. Con este fin realizaremos una presentación analítica de lo que hemos denominado el "triángulo populista" y una breve exposición de los *impasses* que conocieron los diversos ensayos efectuados, para centrarnos en la última sección en el análisis de cómo estas experiencias frustradas explican, en la larga duración, los particulares desafíos que hoy aquejan a la sociedad peruana.

I. El triángulo nacional-popular.

Por modelo nacional-popular comprendemos el "estado" del sistema político propio de una época de industrialización que busca hacer viable el crecimiento hacia adentro, a través de la incorporación política de los sectores populares y el esfuerzo por movilizar las masas de manera "organizada" (esto es, canalizar las demandas sociales a través del aparato político-institucional). A pesar de la variedad de interpretaciones existentes sobre el modelo nacional-popular en América Latina, bien puede decirse que un cierto "consenso" reina entre los sociólogos a la hora de determinar su "época". En general, se trata del período que se extiende desde la crisis de 1929 hasta los años 1959-1964, marcado por la imposibilidad de importar productos manufacturados y el desarrollo de una industria sustitutiva cuyo destino era la satisfacción de la demanda interna. Es en ese contexto económico -acumulación de reservas ociosas durante la segunda guerra mundial y desarrollo de las exportaciones al finalizar ésta- que se produce el cuestionamiento de la dominación oligárquica y la consolidación, en varios países latinoamericanos, de regímenes nacional-populares a través de pactos sociales amplios. El modelo nacional-popular designa entonces, sobre todo, un pacto de gobierno interclasista, que corresponde al momento de constitución de nuevas alianzas

entre el capital extranjero y el capital nacional, y a la expansión del mercado interno. En suma, existe una relación privilegiada entre el modelo nacional-popular y la fase de sustitución de importaciones. Período marcado por fuertes migraciones rurales hacia las ciudades y por la aparición de un nuevo grupo de empresarios que crece al amparo de la intervención estatal (gracias a la transferencia de ingresos del sector tradicional hacia el sector moderno de la economía). Por supuesto, este "consenso" interpretativo presenta diversas formas. En primer lugar, aquellos que insisten en el carácter "disruptivo" de la "movilización social", y sostienen que la emergencia política de sectores populares desprovistos de orientaciones ideológicas o de una conciencia de clase específica constituye la condición de posibilidad de la consolidación del populismo. La lectura de Germani (1962) que, por encima de los errores o deformaciones, marcó a la sociología latinoamericana, subraya la relación heterónoma de las masas respecto del líder, colocando especial énfasis en la distinción entre antigua y nueva clase obrera. Atraídos por el proceso de modernización, los migrantes internos serían los que contribuyeron a engrosar el incipiente proletariado industrial, cuya integración socio-política se realizaría bajo moldes autoritarios a partir del acceso del peronismo al poder. Finalmente, la "disponibilidad" social y cultural de esta nueva masa urbana habría hecho posible el triunfo del peronismo y asegurado la primacía de la integración nacional sobre la conciencia de clase. En segundo lugar, se hallan los análisis que parten de la incapacidad de la burguesía tradicional para asegurar su hegemonía de clase, y colocan la especificidad en la emergencia de un "Estado de compromiso" que se desliga de los intereses particulares para dominar el conjunto del cuerpo social (Weffort, 1978)¹. Por último, para otros el modelo nacional-popular se caracteriza, sobre todo, por un modo específico de intervención social del Estado, mediante el cual éste se convierte en el verdadero "constructor" de las clases sociales, asegurándose la subordinación de los actores sociales al sistema político (Touraine, 1988).

Ahora bien, cualquiera que sea su "período" o sus "causas" (transformaciones económicas, crisis de hegemonía, presencia de masas en "disponibilidad" ideológica), el modelo nacional-popular se caracterizó por un conjunto de prácticas político-económicas específicas que han configurado una de las grandes matrices interpretativas de la sociología latinoamericana: entre ellas, un vínculo específico entre actores sociales y Estado; una determinada relación entre el líder y las masas a través de un discurso y un estilo político novedoso; una ideología nacionalista, una estrategia de desarrollo mercado-internista y un régimen de redistribución económica; la defensa de valores sociales ligados a

¹ Esta lectura conoce, a su vez, diferentes variantes: desde los que desarrollan la hipótesis bonapartista (Dos Santos, 1972) y aquellos que señalan el límite del Estado populista en el estadio de desarrollo de las luchas sociales, dentro de un marco claramente marxista-evolucionista (Ianni, 1968)

la identidad de los sectores populares a través de una concepción movimientista de la política y de la sociedad. Se trata de un conjunto de rasgos que aluden a la identidad y a la compleja unidad del fenómeno populista como experiencia global de ciertos sectores sociales y, de manera más general, como modelo de integración social.

Sintetizando lo anterior, podemos afirmar que tres grandes ejes definen el modelo nacional-popular. En primer lugar, un estilo político particular encarnado en un líder, que implica un conjunto de rasgos simbólicos. El modelo nacional-popular tuvo en el líder su clave, en la medida en que el conjunto de sus elementos constitutivos remitían, tarde o temprano, a su presencia protagónica. La importancia del líder dentro del modelo nacional-popular no se reduce, desde ningún punto de vista, a una mera "sobrevivencia" de elementos caudillescos. Su presencia y su acción responden a elementos propios del juego político que no pueden ser interpretados solamente en función del legado del pasado. Nada lo ejemplifica mejor que el conjunto de cualidades particulares que el líder debe poseer a fin de "encarnar" cabalmente el líder populista: un estilo político basado en la ficción del sacrificio futuro del líder, a la sombra del tercero incluido, en la construcción relacional de la noción de "pueblo" (Martuccelli y Svampa, 1993). Así como la definición del enemigo es constitutiva de la identidad del pueblo, el líder populista requiere para sobrevivir de la amenaza permanente de un enemigo. Si el otro desaparece, la relación líder/pueblo corre el riesgo de desagregarse, en la medida en que la pareja es dependiente de la asechanza del enemigo. La existencia de un tercero, siempre impreciso, permite darle una "realidad social" a un conjunto de individuos atravesados por una debilidad identitaria. En los regímenes nacional-populares se impone el principio del tercero incluido: los que están afuera, también están adentro; el enemigo está entre nosotros. El populismo llega hasta aquí. Sólo hasta aquí. El paso siguiente, la extirpación del miembro gangrenado, es la zancada propia del Terror revolucionario y, más tarde, el zócalo ideal-represivo del totalitarismo a través la entronización del mito del *Volk*. Pero el populismo es un régimen de otro orden. Este exceso le ha sido históricamente vedado. En verdad, dada su experiencia histórica ello habría supuesto "salir" de la conciencia imaginaria del "pueblo" y encarnarlo en una "realidad" política. Pese a que en el populismo anida esta tensión y que durante mucho tiempo buscó volverse un absoluto, siempre necesitó cohabitar prácticamente con el enemigo. Ahora bien, el líder populista no emerge sino ahí donde su práctica personal es prolongada, y ésta se articula con los otros dos elementos del triángulo nacional-popular. Nada resulta más falso que reducir el "líder" populista al mero rol de conductor de un movimiento o de un gobierno que aplica políticas económicas mercado-internistas o que promueve un tipo de vinculación entre la sociedad civil y el sistema político.

En segundo lugar, el populismo se caracteriza, como hemos señalado más arriba, por un tipo de intervención económica dirigido a la consolidación del mercado interno. Este modelo entró en crisis, en diferentes países, al advertirse los límites de sus posibilidades redistributivas: el mercado interno no logró una expansión continua y la demanda se concentró en las capas altas y medias. La realidad económica, que había posibilitado la emergencia del modelo nacional-popular, terminó por sellar la fractura del pacto populista.

En tercer lugar, el modelo nacional-popular inauguró un tipo de vinculación "orgánica" entre los sindicatos y el sistema político que apuntó a la participación organizada de aquellos. La característica principal fue la subordinación de los actores sociales al sistema político y del sistema político al líder.

El modelo nacional-popular no existe sino en la medida en que se da una exitosa articulación política entre estos tres elementos. Diferentes experiencias políticas nos muestran que si alguno de estos elementos falta, lo característico del triángulo nacional-popular no sólo termina por desvirtuarse, acentuándose su debilidad, sino que, además, el tratamiento de los desafíos de los cuales éste emerge resulta insuficiente.

En suma, en tanto que manifestación de una práctica política específica, los elementos que constituyen al triángulo nacional-popular no "existen" verdaderamente sino a través de sus ambiguas relaciones recíprocas. En verdad, es la debilidad propia de cada uno de estos elementos lo que obliga permanentemente a buscar, a través de la práctica política, una articulación entre ellos.

II. El APRA: veto e impasse del triángulo nacional-popular

El movimiento aprista nació en los años veinte, bajo el impulso de Haya de la Torre, caracterizado por una ideología nacionalista, antiimperialista, con la aspiración de convertirse en un frente único continental que uniría a los pueblos "indoamericanos" en su lucha contra el imperialismo americano. En su origen, el movimiento encontró gran apoyo entre los trabajadores de las plantaciones cañeras del norte del Perú así como entre aquellos sectores perjudicados por la concentración de la tierra y por la penetración de los monopolios extranjeros, sobre todo la empresa Casa Grande, cuya visibilidad se acrecentó con la Gran Depresión, a través del monopolio que ejercía dicha empresa sobre el comercio en el Valle de Chicama. Este descontento en el cual coincidían pequeños agricultores, comerciantes, artesanos y el proletariado azucarero de la región, constituyó la base electoral del APRA (Klaren, 1970) y, con el tiempo, la implantación social del norte del país, conocida como baluarte del aprismo.

El APRA fue el partido de las clases medias provincianas, más tarde urbanas, y de ciertos sectores oligárquicos amenazados por la penetración del capital extranjero, siendo débil su penetración en las clases trabajadoras. Esta base social permite comprender las grandes líneas de la matriz interpretativa de la realidad peruana propuesta por Haya de la Torre: una sociedad dualista, la necesidad de una burguesía nacional, el papel que debe asumir el Estado, el antiimperialismo, el indigenismo, el relativismo histórico. En primer lugar, Haya subraya el carácter dualista de la sociedad peruana (Bourricaud, 1967), el contraste entre grandes terratenientes y la masa de la población, así como la distancia entre el sector moderno y el tradicional de la economía, punto de partida de la noción de "relativismo histórico" (Haya, 1961)². Una situación marcada, sobre todo, por la ausencia de una clase social lo suficientemente homogénea y fuerte como para dirigir el país. Haya considera que, a pesar de la incapacidad política de los obreros, los campesinos y las capas medias, estos grupos poseen como interés común la oposición a la dominación de la oligarquía. En suma, para Haya el capitalismo no es un fenómeno que se origine en el Perú a partir de un proceso interno de maduración, sino que es el resultado de una importación en Indoamérica el imperialismo es la primera etapa del capitalismo, penetración que impide y obstaculiza la creación de una burguesía nacional y explica el papel que otorga al Estado: de este modo la hegemonía estatal dirigida por la pequeña burguesía daría nacimiento a una auténtica burguesía nacional.

En muchos aspectos los objetivos centrales del APRA aparecen como premisas del modelo económico implementado por las experiencias nacional-populares: creación de un Estado antiimperialista y de una coalición multclasista de los oprimidos (Haya, 1936). Influencia que es posible advertir en el programa "máximo" del APRA que proponía la nacionalización de algunas industrias controladas por empresas extranjeras, la reforma agraria y la creación de un sector de empresas estatales y cooperativas (Lago, 1992). Pero sobre todo, el vínculo entre el APRA y las experiencias nacional-populares realmente existentes se manifiesta en el deseo de Haya de crear un cuarto poder, el Económico, que sería ejercido por un Congreso Económico Nacional integrado por representantes del Estado, el Trabajo y el Capital, con el objeto de conciliar los intereses de las diversas clases sociales, gracias a una planificación concertada.

Sin embargo, lo característico de la historia peruana ha sido la imposibilidad práctica de realizar desde el gobierno este programa. La crisis económica de 1930 desencadenó una protesta popular que llevó a la formación de los primeros partidos de masas del país. Dada la incapacidad de

² Concepción según la cual el "tiempo" propio a cada actor o sistema social se mide en función de aquel que está más desarrollado, así como la velocidad se mide respecto de un principio absoluto que es la velocidad de la luz.

la oligarquía de controlar la situación, este proceso no tardó en producir un enfrentamiento entre el ejército y el APRA, dando origen a un antagonismo que se prolongó durante décadas. Por lo demás, la importante capacidad organizativa del APRA, así como la "mística" que desarrollaron sus militantes durante casi tres décadas de proscripción³, acentuaron el rechazo de la clase dominante sobre cualquier posibilidad de mediación política eficaz con los sectores populares.

Sin embargo, la proscripción política no impidió el desarrollo de una política de alianzas que, en los hechos, se tradujo por un bloqueo de toda posibilidad reformista. La primera alianza fue llevada a cabo en 1956, con un sector exportador de la burguesía que se oponía a la reelección de Odría; más tarde, bajo el primer gobierno de Belaúnde, el APRA concertaría la alianza conservadora y antireformista con el partido de Odría⁴. Oscilaciones que produjeron un vacío político, sobre todo entre los sectores populares y las nuevas clases medias urbanas. Pero dichos procesos condujeron también al sobredimensionamiento de los otros dos vértices del triángulo nacional-popular: el papel del líder y un tipo de vinculación entre el partido político y los actores sociales.

Tomemos, en primer lugar, el rol providencial del líder. Haya de la Torre, el "jefe máximo", construyó su aura personal de acuerdo con estas vicisitudes históricas. En él priman la exigencia moral del sacrificio y la valoración del sufrimiento como elemento de redención. Esto es sobre todo notorio en el discurso del 24 de mayo de 1945 para sostener la candidatura de Bustamante y Rivero: el APRA es el partido de los "mártires", de "ciudadanos ejemplares" unidos por una "disciplina fraternal". Avatar histórico que requiere de la presencia de un líder caracterizado por su rectitud moral ("guía" y "maestro") y por su eminencia intelectual⁵, dos cualidades que le permitirán asumir su papel de mediador entre el pueblo y el partido. El papel casi "mítico" del "jefe máximo", la sobre-presencia retórica de los temas de la "abnegación" y del "sacrificio" emergen como una radicalización de lo propio de el estilo populista, a saber la necesidad de construir una identidad política bajo la amenaza de un tercero. En las experiencias populistas muchas veces este "enemigo" fue más virtual que real, pero en el caso del APRA su proscripción no hizo sino acentuar este rasgo central.

Situación que condujo a su vez, a una subordinación extrema del partido (y de las organizaciones sociales afines) al dictado del líder. Pero es la historia política peruana la que explica el énfasis de Haya de la Torre en la necesidad de un partido organizado, la voluntad de crear una

³ A excepción del breve paréntesis de legalización bajo el mandato de Bustamante y Rivero (1945-1948), el APRA sólo regresaría a la legalidad en 1956. Proceso de proscripción agudizado por el encono y la campaña de desprestigio realizada durante décadas por el tradicional diario El Comercio, después del asesinato de uno de sus directores por un militante aprista, ocurrido en los años treinta.

⁴ . Una evolución política observable también en el pensamiento de Haya de la Torre (Haya, 1936 y 1986)

⁵ Este rasgo distingue el aprismo de otras experiencias nacional-populares latinoamericanas; sobre todo del peronismo, que se halla marcado por un fuerte anti-intelectualismo.

"organización semejante a la del Estado", la elaboración de complejos organigramas internos donde las secretarías se correspondían con los ministerios; la creación de una red extensiva de organizaciones populares: comités apristas de base organizados jerárquicamente entre sectores, distritos y zonas que aseguraban la prestación de ciertos servicios. Desde la oposición y muchas veces desde la proscripción, el APRA recreaba, real e imaginariamente, el vínculo propio del modelo nacional-popular, a saber la subordinación de los actores sociales a los designios del aparato político. Más imaginario que real: es el caso de las secretarías; más real que imaginario: es el caso de los locales partidarios donde se desarrollaban academias de formación pre-universitaria, de contabilidad, de oratoria, de oficios, bibliotecas. En medio de este entramado de actividades, el militante aprista encontraba un ámbito de fraternidad partidario.

Doble realidad que conduce a la exacerbación del exclusivismo aprista, a la idea de que "solo el APRA salvará el Perú". Posición que condujo a Vega Centeno a acentuar los elementos míticos presentes en el Apra: éste actualizaría a través de su historia las diversas formas de participación arraigadas en el imaginario colectivo del mito andino del refugio (Vega Centeno, 1991). Ante el "agravio" de la conquista se construye la narración del "refugio": una sociedad política y militarmente vencida produce una forma de aprehender la realidad y la historia que le sirve para mostrarse ocultándose al invasor. Este proporciona además una interpretación de la vida y de la historia que le permite seguir viviendo y esperando a pesar de la derrota. Haya de la Torre habría pues establecido una forma de relación compleja con el sistema socio-cognitivo popular: gracias a su palabra se puede seguir viviendo, creyendo y luchando a pesar de la persecución y del fracaso.⁶ Cualquiera que sea la validez de esta interpretación, lo que nos interesa subrayar aquí es la sobresimbolización de la acción política ocurrida en el APRA, ya sea en torno del "jefe máximo", ya sea en torno del "pueblo aprista". En efecto, el dispositivo político y retórico del APRA se basó en la afirmación de que cada aprista es responsable ante el jefe supremo y éste a su vez sólo es responsable ante todo el pueblo. De esta manera, la proscripción política del APRA, y la imposibilidad del partido de realizar desde el gobierno su programa, condujeron a una sobredimensionalización de los otros dos elementos del triángulo nacional-popular. Pero sobre todo, y dado que el APRA mantuvo durante décadas el tercio histórico del electorado, ello deslegitimó un sistema político ya de por sí

⁶ Habría pues una reactivación de la capacidad mítica a través de una narrativa en la cual se pueden distinguir tres momentos: un pueblo necesitado de salvación, un pueblo que vive dentro de una lógica del refugio, un líder capaz de reactivar esta estructura mítica. El razonamiento, que ha sido utilizado muchas veces, enfatiza la presencia de elementos religiosos apenas secularizados dentro de los movimientos políticos, con carácter mesiánico, del Tercer Mundo (Mulhmann, 1968). En el caso peruano, una estructura interpretativa de este tipo se encuentra sobre todo con relación a los movimientos indígenas (Flores Galindo, 1986).

débilmente representativo⁷, sin darle la posibilidad de convertirse en un aparato de participación popular.

La primera experiencia nacional-popular trunca del Perú produjo así una fuerte segmentación ideológica del tejido social y coadyuvó al debilitamiento del sistema político en sus capacidades de movilización y de reforma.

III. El Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (GRFA) o la ausencia del líder.

Los militares que encabezaron el golpe de Estado de 1968 hicieron suya una concepción del país según la cual la cuestión central del Perú era la carencia de un grupo rector capaz de sostener un proceso de integración nacional y político de la sociedad peruana. Como lo expresaría J. Basadre, el Perú republicano contó con clases dominantes pero no con clases dirigentes, lo que motivó a los militares a poner en práctica un modelo de modernización autoritaria.

Aun cuando el carácter atípico de los militares de la "Revolución Peruana" es menos marcado de lo que muchas veces se supone (Rouquié, 1984), éstos presentaban rasgos específicos. Formados en el CAEM, que les proporcionó tanto una ideología nacionalista desarrollista como un espíritu común, poseían una visión crítica de la sociedad peruana y una visión amplia de la seguridad nacional (Astiz y García, 1972). Para muchos de ellos, el espectro de la insurgencia requería un conjunto de reformas sociales, "una política general de desarrollo económico y social", que suponía una cierta redistribución del ingreso. Pero sobre todo, y paradójicamente, el gobierno militar de Velasco Alvarado pondría en práctica las medidas propugnadas por el APRA desde los años treinta: nacionalizaciones de empresas extranjeras, participación de los trabajadores en la propiedad y reforma agraria. Conjunto de procesos que formarían parte del consenso institucional de los militares (North, 1985), incluyendo una desconfianza hacia los políticos civiles, una clara orientación tecnocrática, la percepción de la necesidad de reformas para consolidar la seguridad interna, y un nacionalismo basado fundamentalmente en el patriotismo militar. Un consenso que, a pesar de ciertas discrepancias,⁸ unió las Fuerzas Armadas en torno del proyecto de crear una "democracia social con plena participación"; más simple, una versión castrense del modelo nacional-popular.

⁷ Recordemos que en 1931 solo un 7,4% de la población tenía derecho a votar y que en 1963 alrededor de un 50% de la población en edad de votar no tenía derecho al voto (North, 1985).

⁸ En efecto, este consenso no impidió la existencia de discrepancias dentro de las Fuerzas Armadas que oscilaron entre una Marina "institucionalista", un ejército de tierra que adhirió, a través de algunos de sus

1. El modelo de desarrollo hacia adentro

El objetivo militar era lograr una reforma que permitiera eliminar la "dependencia externa" y la "dominación interna", causantes de la "desunión nacional" y el "desencuentro" entre Pueblo y Fuerzas Armadas. Un objetivo que se basó en un diagnóstico del problema peruano, en términos similares a los que había enunciado el APRA, sobre todo en referencia a la penetración del capital extranjero: así, lo que el Perú requería era un "desarrollo hacia adentro" mediante la erradicación de los enclaves y sus asociados. Un conjunto de reformas indispensables para asegurar el "autodesarrollo" del país, que haría posible el establecimiento de una "sociedad solidaria" bajo la tutela de un Estado militar. La reelaboración de la idea de defensa nacional se halló así en la base del proyecto militar (Stepan, 1978, pp.127-147).

Tres grandes sectores fueron objeto de reforma. En primer lugar, se apuntó a una reelaboración de la presencia del capital extranjero dentro de la economía peruana, clarificando las nuevas condiciones de inversión, que asumieron formas diferentes según el sector económico, inversiones directas o empresas mixtas. Esto condujo a un incremento importante tanto de la inversión directa extranjera en el Perú entre 1972 y 1974 como del valor de las inversiones americanas, que pasaron de 692 millones de dólares en 1968 a 1.212 en 1975 (Portocarrero, 1978, p.982), lo cual muestra que los vínculos entre el capital internacional y el gobierno militar estuvieron lejos de ser conflictivos, como pretendía la retórica del régimen (Guasti, 1985; Stallings, 1985). En segundo lugar, se realizó la reforma agraria, sobre todo a través de medidas como la expropiación de las haciendas azucareras y de algodón, que fueron transformados en grandes cooperativas dentro de un plan global que incluía la indemnización de los antiguos propietarios⁹, la defensa de la pequeña y mediana propiedad, el impulso de las cooperativas y el aumento de la producción. En tercer lugar, se llevó a cabo la nacionalización de la banca, en especial, la ley general de industrias, implicaba la progresiva participación efectiva de los trabajadores en el capital de la empresa, gracias a la transferencia a la "comunidad industrial" (asalariados incluidos), del 15% de los beneficios anuales, para su reinversión obligatoria en la empresa hasta una suma equivalente al 50% del capital.

jefes, al modelo nacional-popular y en algunos casos socialista, sin descontar la existencia de un ala derechista.

⁹ Según el censo de 1961, 83,2% de las parcelas tenían menos de 5ha y cubrían el 7% de las tierras cultivadas; mientras que el 0,4% de los establecimientos agrarios tenían 500 ha o más y abarcaban el 75,6% de las tierras cultivadas.

En suma, el proyecto militar se propuso combinar la acumulación capitalista del Estado con la del sector privado, a fin de ampliar y homogeneizar el mercado interno, con la consiguiente integración económica y social. El resultado más contundente de las reformas en el aparato productivo fue la eliminación de la estructura terrateniente y la postergación de la tradicional burguesía agraria y comercial. Frente a ello, el Estado amplió y diversificó el aparato burocrático, pero también incrementó de manera importante su presencia en la inversión total, pasando de 16% en 1965, al 50% en 1975; su participación en el PBI pasó del 11% en 1968 al 25% en 1975 (Fitzgerald, 1981). Este conjunto de medidas tuvo, sin embargo, un alcance limitado en la redistribución del ingreso, pues esta solo habría operado dentro de cada sector reformado (y no entre ellos), y en el seno de cada uno de ellos habría beneficiado en proporción desigual los diferentes subsectores (Webb y Figueroa, 1975).

Aun cuando la primera fase del régimen atravesó dificultades económicas, visibles en el déficit fiscal, los graves problemas de balanza de pagos y el peso creciente de la deuda externa, no fueron los factores de orden económico-financiero los que aceleraron su caída, sino los específicamente sociales ¹⁰.

2. Los límites de la subordinación de los actores sociales

En lo que sin lugar a dudas constituye uno de los rasgos más característicos del modelo nacional-popular, el gobierno militar, que había logrado la cooptación de un buen número de representantes de la intelligentsia nacional, intentó a través del SINAMOS (Sistema Nacional de Movilización Social), ejercer el control de los actores sociales y subordinarlos a su política. A la Central de Trabajadores Peruanos se le contrapuso la Central de los Trabajadores de la Revolución Peruana (CTRP), ligada al gobierno. Pero el SINAMOS, que se inició como uno de los organismos estatales de mayor apoyo, pronto entró en contradicción con el desarrollo político de la sociedad y con las tendencias más autoritarias del cuerpo militar, proceso que lo condujo a su paralización y su posterior "desactivación". Desde sus comienzos, en efecto, el SINAMOS debía cumplir un rol contradictorio: por un lado, se encargaba de organizar a la población para acelerar las reformas propuestas por el gobierno, concentrando la hostilidad de las clases dominantes, de los organismos públicos y, en especial, de los servicios de inteligencia, sectores estos que nunca

¹⁰ No negamos con ello la importancia de las limitaciones de la estrategia económica del gobierno, cualquiera sea la explicación escogida, ya sea la hipótesis de que el mantenimiento de un excedente económico permitiría a las inversiones realizadas reducir la vulnerabilidad de la economía peruana (Thorp, 1985, p.78), ya sea que se considere que su crisis no fue inexorable y que ésta se debió a la aplicación de políticas económicas incorrectas (Schydrowsky y Wicht, 1985)

dejaron de sospechar que el SINAMOS pretendía rebasar el control militar. Por otro lado, en la medida en que el SINAMOS procuraba desplazar a las organizaciones populares, también concentraba la oposición de las clases dominadas y de los militantes políticos. Con el tiempo este proceso dio lugar a un enfrentamiento entre sectores del sindicalismo y de la oficialidad, lo que se agravó cuando Morales Bermudez tomó el poder, mediante golpe de Estado interno, en 1975. En suma: ante la incapacidad de organizar a la población de manera corporativista, el gobierno militar decidió quebrar la autonomía de las organizaciones populares, pero se encontró con la fuerte resistencia de éstas. Los servicios de inteligencia agregaron a sus habituales funciones la de detectar los enemigos "infiltrados" en el gobierno. La desconfianza de los militares hacia toda forma de movilización social autónoma incrementó su distanciamiento de la sociedad. Asimismo, a medida que se evidenciaba el fracaso de SINAMOS, la idea de crear un Partido de la Revolución Peruana, encontró una fuerte oposición de la cúpula militar.

El gobierno militar silenció, sin represión excesiva si lo comparamos con otras experiencias del Cono Sur, a los partidos políticos, sobre todo al APRA y a la Acción Popular, a quienes culpaba, junto con la oligarquía y el imperialismo, de ser los causantes del atraso nacional. La visión de los militares se apoyaba en la idea de que las reformas emprendidas terminarían por distanciar a los sectores populares de los partidos tradicionales.

El resultado fue la acentuación del carácter bonapartista del régimen y la consolidación de un gobierno que no lograba representarse más que a sí mismo (Cotler, 1978). El carácter bonapartista se correspondía con la naturaleza castrense del gobierno, su estructura jerárquica y autoritaria, que reproducía fielmente la división clasista y étnica de la sociedad peruana, a partir de la cual los sectores subalternos eran despojados de todo protagonismo político. Por otro lado, la desarticulación de la sociedad peruana, la débil estructuración política de la sociedad civil, así como la fuerte profesionalización del ejército, le otorgaron al gobierno militar una considerable autonomía. Pero, más allá de sus razones institucionales, la capacidad del gobierno militar de encauzar la movilización popular se encontró con un obstáculo mayor: la ausencia de un verdadero liderazgo carismático, como se registró en otras experiencias nacional-populares exitosas en el continente, capaz de producir, a través del fervor y la devoción hacia su persona, la compatibilidad entre sectores diversos.

3. El liderazgo trunco

Debemos tener en cuenta dos *impasses* de naturaleza diferente respecto del liderazgo. El primero se refiere a las reglas de acceso al gobierno, subordinadas a las reglas de la jerarquía

militar y por ende, a un determinado sistema de promoción. Con el objeto de reforzar el carácter institucional del gobierno, el Presidente debía ostentar el rango más alto en la jerarquía militar, lo cual suponía también la rotación del cargo en función de su pase a retiro. Sin embargo, cuando Velasco asumió las funciones de Presidente de la República, no se sometió a dicha regla y buscó su confirmación mediante el voto de los jefes militares, sin acogerse al retiro. El poder institucional de las Fuerzas Armadas tendió así a personalizarse, tanto más que, a medida que surgían tensiones entre conservadores y radicales en el seno del gobierno, el proceso fue acompañado por una centralización creciente de la decisión y por la extensión del rol de arbitraje del Presidente (Bourricaud, 1970).

Pero esta personalización no dio lugar a la emergencia de una jefatura carismática, y esto por razones tanto "estructurales" como en apariencia "aleatorias". En primer lugar "estructurales": la imposición de un jefe carismático habría exigido la constitución de un "partido" de masas capaz de asegurar la radicalización, movilización y encuadramiento necesarios; ahora bien, la desconfianza de los militares hacia la sociedad civil, como el temor de los sectores más "conservadores" del ejército de que la estructura escapase al control castrense impidieron la puesta en práctica de esta opción. Ciertamente, los discursos de Velasco, la "voz de la revolución" (Velasco, 1970), tienen más de una resonancia populista, pero falta en ellos la puesta en escena populista y, sobre todo, la dramaturgia propia del líder: ambigüedad, paternalismo manipulador, la idea del sacrificio y de la traición. Elementos y recursos simbólicos que son, junto con los modelos de movilización o los resultados económicos, rasgos determinantes del éxito de un modelo nacional-popular. De ahí que si bien es cierto que el fracaso del GRFA se explica, en mucho, por las contradicciones existentes entre una política distributiva en el marco de un patrón de desarrollo basado en la concentración de ingresos y capital (Cotler, 1985, p.59 y ss), así como por la ausencia de un grupo local empresarial dinámico y un Estado experimentado y competente en el ámbito económico (Thorp, 1985); el fracaso se debió también a la incapacidad del gobierno militar por articular, realmente, los tres ejes del modelo nacional-popular.

A esto hay que añadir las diferencias entre las dos fases del GRFA. La "segunda fase", resultado de la crisis política que desembocó en la caída de Velasco, significó la paulatina erradicación de las características nacional-populares de la "primera fase". La reacción de los sectores populares, en especial los trabajadores del sector formal y los sectores medios asalariados, fue la de arremeter en contra del gobierno frente a sus medidas antipopulares. Por otro lado, los sectores dominantes y el capital multinacional siguieron oponiéndose al gobierno, por no descartar definitivamente la herencia nacional-popular. Ciertamente, Morales Bermúdez cambió el rumbo con

relación a la primera fase, excluyendo toda veleidad de movilización popular, y atendiendo las demandas del poder económico internacional. Pero, sin posibilidades de perpetuación, ampliamente contestado, el gobierno militar tras las movilizaciones de julio de 1977 (Sulmont, 1980), debió organizar una larga transición a la democracia.

IV. Alan García o la descomposición del modelo nacional-popular

Muy diferente es la experiencia del gobierno de A. García quien, tras su triunfo electoral en 1985 con 46% de los votos, se esforzó en poner en práctica una política nacional popular clásica. En este caso, las limitaciones de la experiencia fueron marcadas, por un lado, por las dificultades económicas y la inoportunidad de un modelo heterodoxo; por otro lado, por la crisis aguda del vínculo social que vivía la sociedad peruana. Ante una y otra, la actitud de Alan García fue el sobredimensionamiento de los rasgos simbólicos del líder populista: mientras en los hechos la viabilidad del modelo nacional-popular era cada vez menor, más nítida era la impronta de éste sobre la conducta y el discurso del líder. Para dar cuenta de este enunciado comenzaremos por presentar los contornos de las medidas económicas implementadas, luego, la fragilidad de las organizaciones sociales (para algunos incluso la "anomia" de la sociedad peruana), para concluir con una presentación del discurso del líder. El orden propuesto no es arbitrario: el conjunto de medidas puestas en práctica por el gobierno aprista reposaba sobre la capacidad del líder de establecer alianzas tanto con la élite empresarial como con las mayorías nacionales. Su soledad y su ingreso en la impronta imaginaria del populismo están directamente relacionados con el fracaso de estas dos tentativas.

1. Un modelo económico imposible

Cuando A. García asume la presidencia en 1985, el ingreso per cápita del Perú era comparable al que existía a fines de los años sesenta, más de la mitad de la fuerza de trabajo estaba subempleada y la inflación se aproximaba al 200% anual. A este cuadro debemos añadir la situación de recesión interna y el peso de la deuda externa.¹¹

¹¹ Como lo demuestra R. Thorp, la crisis se inscribía dentro de una mayor, aquella del modelo de crecimiento de exportaciones, iniciada en los años sesenta, y que solo permitió breves mejoras económicas en función de un efímero aumento del valor de las exportaciones, sin que las políticas a corto plazo hayan podido rectificar los patrones económicos de largo plazo (Thorp, 1987).

A fin de superar estas dificultades A. García, implementó una política nacional-popular en una época en la cual otros países de la región renunciaban a ella. Según la opinión de sus asesores, el rotundo fracaso del neoliberalismo de Belaúnde exigía la aplicación de un "modelo heterodoxo" (*El Perú Heterodoxo*). En su estructura mínima, el proyecto apuntaba a crear las condiciones internas que permitirían a la economía ir hacia lo "externo", pero cuidando de no asfixiar el circuito interno de acumulación. Para ello, era preciso poner en pie "una alianza política que diera sustento a esa acumulación interna-hacia-lo-externo" (Castillo Ochoa, 1992, p.69). Y en la medida en que las áreas de acumulación externa y el sector fuerte de la minería dependían del Estado, la alianza tendía a establecerse con "los nuevos grupos económicos", favorecidos por el largo proceso de sustitución de importaciones, los que fortalecidos desde el mercado interno, debían proyectarse hacia el sector externo (Durand, 1988).

Durante los dos primeros años, el modelo económico, así como la alianza política que lo sustentaba, generó la ampliación del consumo y la utilización creciente de la capacidad industrial ociosa. La respuesta de la economía se tradujo por una expansión sin precedentes de la producción: en 1986, el crecimiento del PBI fue de 9,5%, y de 7,8% en 1987. El empleo en el sector formal creció el 12%. Se redujo la inflación y los salarios reales aumentaron un 24% en dos años.

Pero el modelo requería grandes inversiones en actividades capaces de generar divisas. En efecto, y como lo señala uno de los principales asesores económicos de A. García, el economista argentino D. Carbonetto, la reactivación con estabilidad de costos produjo, como en otras experiencias nacional-populares (Dornbusch y Edwards, 1990), dos efectos previsibles: el primero, el agotamiento de la capacidad ociosa inicialmente disponible; el segundo, la alta dependencia de insumos y bienes de capital importados que condujo, a medida que el país crecía, a un aumento de las necesidades de divisas de importación. La disyuntiva era clara: se lograba generar en el sector privado un entusiasmo total en la nueva ruta del desarrollo, o en el mediano plazo el conjunto del proceso se ahogaría bajo la doble asfixia de la carencia de dólares y las limitaciones de la oferta interna (Carbonetto, 1990).

Durante 1986 se celebraron concertaciones continuas con los grupos industriales (los entonces denominados "doce apóstoles") para que invirtieran en empresas orientadas hacia la exportación.¹² Los problemas surgieron en 1987, cuando un informe encomendado por el gobierno

¹² Una de las iniciativas fue la creación del Consejo Nacional de Inversiones y la segunda, la creación de un Fondo de Ahorro e Inversión cautivo. De cada 2 intis que colocara en ese fondo un inversor privado, el Estado premiaría con un inti adicional (una medida que intentaba controlar la fuga de capitales). Pero la condición era que al año los beneficiarios presentaran un proyecto productivo.

mostró que las empresas que más invertían (la inversión bruta fija había aumentado el 7%) eran aquellas orientadas al mercado interno ¹³, mientras que el sector privado orientado hacia el mercado externo se beneficiaba con el auge, pero no reinvertía. Sobre la base de estos estudios y ante el estrangulamiento evidente de la economía peruana, en julio de 1987, A. García anunció la estatización de las bancas comerciales y las compañías de seguro privadas.¹⁴ Tras estas medidas, la oposición política se reorganizó con la creación del FREDEMO y, sobre todo, el gobierno perdió el control de la economía. En lo político, el clivaje "banca privada o estatal" fue desplazado por el de "libertad o dictadura". En lo económico, los empresarios abandonaron todo proyecto de reinversión y orientaron una enorme masa de utilidades hacia el mercado paralelo del dólar. El fracaso de la concertación con los grupos económicos condujo así a una serie de dificultades: caída de la tasa de inversión, déficit fiscal a causa de la disminución de la recaudación fiscal, inflación, reducción del gasto real del gobierno central (Trillo y Vega, 1989).

2. Crisis del vínculo social y descomposición de los actores

Pero el fracaso de concertación "desde arriba" tuvo una prolongación en el fracaso de la conducción de "los de abajo". La desagregación de los sectores populares en el Perú se tradujo por dos realidades opuestas. Por un lado, y a pesar de su debilidad, los trabajadores organizados alcanzaron, durante los primeros meses, un aumento cercano al 28%, ahí donde el gobierno sólo había previsto un 16%. Por otro lado, la transformación del tejido social, la rapidez del proceso de urbanización, la existencia de una izquierda política con un caudal del 30% a mediados de los

¹³ En realidad, informes posteriores mostraron que las acusaciones fueron infundadas: la inversión privada se había duplicado entre 1985 y 1987, aunque la inversión se hizo en construcción e inventarios antes que en equipos. El punto ha sido muy debatido entre los analistas. Para algunos, la inversión era un hecho, pero el apresuramiento del gobierno impidió la consolidación de esta tendencia. Para otros, al contrario, los empresarios jamás confiaron verdaderamente en un gobierno y en un líder al que percibían como (potencialmente) "ingobernable". Para estos últimos analistas, entre los cuales se cuentan numerosos expertos próximos al gobierno, que se expresaban en la revista *Socialismo y Participación*, el error de A. García fue el de haberse centrado en una reactivación de la economía vía el incremento de la demanda, sin decidirse a realizar reformas estructurales de la producción. En fin, para Carbonetto (op.cit.), el pacto se habría roto por la presión negativa que habrían ejercido simultáneamente sobre los empresarios la oposición política, la inseguridad, la presión externa, la incapacidad de la propia administración central así como los conflictos en el interior del partido Aprista.

¹⁴ Sin embargo, es preciso ubicar la nacionalización de la banca dentro de la visión particular que de la dominación social del Perú poseía A. García: para éste la desintegración de la vieja oligarquía había dado paso a un sector de la clase dominante, más ligado al capital financiero internacional, que utilizaba los instrumentos del Estado para favorecer su propia estrategia de desarrollo, y ello en desmedro del resto de la clase dominante (industriales, medianos mineros, y estratos provincianos, los que habían perdido fuerza y capacidad de influencia sobre el Estado). Una transformación que según A. García definió "el nuevo carácter del imperialismo", iniciado después de la crisis mundial de los años setenta, y basado en circuitos financieros en los cuales los bancos son el instrumento fundamental de dominación, alrededor de cada uno de los cuales se organizan grandes imperios gracias a los cuales la dominación externa se capitaliza *in situ*, por el ahorro nacional, y a través del control de la acumulación productiva (García, 1987).

ochenta, la cada vez más inquietante presencia rural y urbana de Sendero Luminoso, unido tanto a la débil confianza que A. García poseía en el partido, obstaculizaron la consolidación de una estrategia de subordinación de los actores sociales a los dictados del ejecutivo.¹⁵

A mediados de los ochenta, se tornó manifiesta la incapacidad del Estado por responder a las demandas, productos del crecimiento demográfico, de la explosión de las expectativas, de un mayor acceso de las masas a la información, de una urbanización sin industrialización y de una crisis económica sin precedentes que produjo un problema de vacío de poder y de legitimidad. Esta situación agravó el contraste entre la fortaleza del liderazgo personal de A. García, por un lado, y las insuficiencias tanto del partido aprista como de las organizaciones de la sociedad civil, por otro lado. La desconfianza de A. García hacia su propio partido y hacia sus militantes se vio alimentada por la escasa presencia del APRA entre los protagonistas de las luchas sociales urbanas desde los setenta: movimientos de pobladores y de estudiantes, nuevos sindicatos, trabajadores informales, grupos que constituían un espacio de afirmación y crecimiento de la izquierda marxista. Para A. García la renovación de la alianza con los sectores populares dependía más del poder persuasivo del líder que del (despliegue eficaz del aparato partidario. Además de que el APRA había quedado al margen de este proceso, confinado a las capas medias) que buscaban constituir un frente único "de clases medias, campesinas, obreros, intelectuales"; aspiración que pertenecía a la retórica del pasado.

A. García se representaba a los sectores populares como sectores sociales marginales heterogéneos, con organizaciones intermedias débiles. Ciertamente, en las últimas décadas el Perú había sufrido importantes transformaciones que se continuaron bajo el gobierno de A. García y que condujeron a una "descampesinización sin proletarización" (López, 1992, p.8). El hecho es conocido: la migración hacia las ciudades no se tradujo por una expansión de sectores "modernos" sino por un incremento vertiginoso del número de informales,¹⁶ lo cual acentuó el fenómeno de anomia y apatía política. La fidelidad de los sectores populares a los partidos o agrupaciones de izquierda, así como su posibilidad de poner en práctica políticas autónomas parecían evanescentes

¹⁵ Poco importa para lo que aquí nos interesa que en los años ochenta el Perú haya sido o no el teatro de la emergencia de un capitalismo popular (H. de Soto, 1987), de un desborde popular portador de una nueva ordenación social (Matos Mar, 1984), de nuevas redes de solidaridad familiares o regionales entre los migrantes rurales (Gölte y Adams, 1987; I. Degregori et al., 1986). Lo que nos interesa subrayar es la imposibilidad del partido Aprista por canalizar ese conjunto de actores dentro de estructuras políticas.

¹⁶ Recordemos que en el lapso que va de 1950 a 1988, la población empleada en la agricultura disminuye de 61% al 35%, que el porcentaje de trabajadores empleados en la industria manufacturera cae del 14% en 1950 al 10% en 1988, y que el número de informales se triplica durante esos 38 años. Por otro lado, a la debilidad relativa de los sindicatos peruanos, se añadía el hecho de que los obreros sindicalizados representaban solo el 17% del PEA, y que el grueso de los sectores populares urbanos estaban

o poco probables: de ahí que A. García haya creído posible revivir una política populista a partir de una relación directa con los sectores populares, a través de políticas sociales que trataron de apoyarse sobre la capacidad de acción locales ya existentes.¹⁷ Ahora bien, puesto que la designación de los actores participantes en la implementación de las políticas sociales era competencia del partido, un cambio de orientaciones suponía, en muchos casos, un cambio de los actores locales. Estos, sin embargo, resultaron celosos defensores de sus atribuciones y conocedores de los procedimientos y estrategias para negociar con las autoridades. Como lo señala acertadamente R. Grompone, el gobierno no podía comenzar como si los antecedentes, la memoria colectiva y las tradiciones organizativas de los pobladores no hubieran existido nunca o pudiera considerárselas como definitivamente perdidas en el pasado. Pero la razón final de esta estrategia política encarada por el APRA se encuentra tanto en la visión que del país poseía A. García como de la manera como concebía su papel de conductor político. En fin, si las condiciones que favorecen el "regreso del líder" en América Latina ya estaban presentes en la sociedad peruana desde mediados de los ochenta (Zermeño, 1989), éstos fueron particularmente acentuados por la persona y la visión política de A. García.

3. El sobre-protagonismo del líder

El discurso de A. García presenta temas ya desarrollados por Haya de la Torre, aun cuando en el primero es posible observar una importante inflexión, luego de la firma del decreto de nacionalización de la banca en 1987.¹⁸ En efecto, si bien García retoma, en la primera etapa, el tema clásico del antiimperialismo (una de las banderas tradicionales del APRA), su objetivo era la "gran transformación". La segunda etapa posee, a su vez, dos momentos: el de la lucha y el de la retirada. Pero en ambos períodos es dable observar una utilización estricta de los tópicos propios del lenguaje nacional-popular: en suma, de la promesa del cambio a la confesión del fracaso, a causa de la acción obstaculizadora de los poderosos. Durante estos dos momentos retóricos, A. García no logró separarse de una concepción unanimista de la política que supone la descalificación, más real que enunciativa, de las otras fuerzas sociales; visión que condujo, a medida que la crisis se acentuaba, al repliegue imaginario del líder sobre sí mismo.

compuestos por informales, migrantes, sub-empleados lo que acentuaba la debilidad organizativa y la conciencia reivindicativa

¹⁷. Programa de Apoyo al Ingreso Temporal, programa de Asistencia directa destinado a mujeres de sectores populares, en menor medida el apoyo con crédito a los sectores informales

¹⁸ La presencia de elementos imaginarios alrededor de la persona de A. García ya son rastreables en la manera misma en como se construye su vínculo con Haya de la Torre, su estadía en Europa, su legitimidad intelectual gracias a *El Futuro diferente*. Véase para estos puntos (Grompone, 1991, p.153 y ss.).

En un primer momento, A. García se presentaba como el heraldo de la Gran Transformación: el Apra no ha venido a "gerenciar la crisis" sino a "transformar el país". Pero si su proyecto apuntaba a transformar las relaciones de poder, su discurso adoptaba un tono conciliador: "Soy candidato de Apra pero mi compromiso es con todos los peruanos". Así, la campaña electoral fue lo suficientemente conciliatoria como para ganar el apoyo de la clase empresarial y media. Sin embargo, ya en esta etapa se perciben elementos discursivos que remiten, imaginariamente, al sacrificio del líder: "En verdad te digo que vamos a caminar el árido desierto de la prueba histórica. Sufriremos muchas dificultades, pero yo estaré a tu lado como un soldado más, como un trabajador más, como un ambulante más, quizá como un muerto más". Sobre todo, se afirma el carácter profético del líder: "Hablo en nombre de los viejos héroes y las vastas multitudes. Hablo en nombre de quién no está pero que me señaló el camino. Llegaremos nosotros y nuestros hijos, te digo, a esa tierra prometida, a la conquista del pan nuestro y la libertad". Este discurso encuentra su prolongación en una práctica presidencial, a saber los "balconazos", aquellas reuniones "espontáneas" de masa al pie del Palacio de Gobierno, en las cuales se vislumbra, socioestéticamente, la dinámica de lo político para A. García: un grupo de individuos que escuchan, pasivamente, la Palabra del líder, único verdadero actor de la escena política.

Pero tras el proyecto de nacionalización de la banca y la reacción que ella suscita, el discurso "conciliador" desaparece, y cobra centralidad el conflicto entre el "pueblo" y los poderosos (Birnbaum, 1979): "En nuestra patria hay un millón 200 mil familias, campesinas y comuneras, en nuestra patria hay un millón 200 mil familias desempleadas o subempleadas, en nuestra patria hay 300 mil familias dueñas de pequeña y mediana industria. Y frente a todo ello hay 4 poderosos grupos que, estos días, han hecho público su poder y su influencia, en la ardorosa defensa de sus grandes intereses". A medida que se profundizaba el enfrentamiento, A. García ampliaba el grupo de los "enemigos del pueblo": la contraposición sería cada vez más entre un pueblo laborioso, vejado y explotado por siglos, y los industriales, los cuales, a pesar de haber sido favorecidos por el gobierno, habían decidido no invertir en el país.

Sin embargo, incluso en los momentos más álgidos de la lucha política, la actitud "conciliadora" de Alan García permanece como una constante: el extremismo verbal va acompañado por la conciencia de que existen ciertos límites que deben ser respetados¹⁹. Sobre todo, y a medida que se confirmaban las dificultades, García iba deslizándose cada vez más por la

¹⁹. En todo momento, a pesar de la retórica en torno a la necesidad de las transformaciones, A. García intenta contener el radicalismo de la juventud aprista, enfatizando el rol pasivo de las masas, destinadas a legitimar las acciones del líder. Así, la función del líder es convencer, la del pueblo es escuchar.

pendiente discursiva del autosacrificio que hacia la lógica del exterminio del enemigo político: "Yo puedo caer, pero sé que ustedes no me van a olvidar"...

En resumen, el fracaso del triángulo nacional-popular en el caso de A. García hace referencia, paradójicamente, a una acentuación de sus rasgos característicos: modelo económico, tipo de vinculación subordinada de los actores sociales, rol protagónico del líder. En verdad, la hipertrofia de estas dimensiones provino de la incapacidad del gobierno de establecer un vínculo político con los grupos organizados o de contribuir a la emergencia de actores sociales. La descomposición del tejido social y la imposibilidad de estructurar y de mediar acuerdos entre actores sociales constituidos, se encuentra en la base del descalabro del último intento populista peruano.

V. A la sombra de la desactivación: una herencia problemática

A lo largo del siglo, en el Perú se registraron distintas formas de desencuentro del triángulo nacional-popular. Con Haya de la Torre asistimos a la conjunción entre el "líder" populista y un "pueblo" aprista; sin embargo, la experiencia quedó trunca a causa del veto permanente de la clase dominante y de los sucesivos golpes militares. La ausencia de un "Estado" impidió así la consolidación del modelo. En un segundo momento, bajo el GRFA, encabezado por el general Velasco Alvarado, registramos otra forma de incompletitud: a la puesta en práctica de una política económica nacional-popular y a la voluntad del régimen de encuadrar la movilización popular (con las limitaciones que hemos señalado) le faltó, sin embargo, la presencia de un genuino liderazgo populista. En suma, ninguno de los elementos propios del liderazgo populista fue realmente desplegado por Velasco Alvarado. Por último, en un tercer momento, bajo el gobierno de Alan García, el Perú vivió un nuevo desencuentro: por un lado, existía un conductor con los atributos personales y discursivos del líder populista, por otro lado, la posibilidad de implementar de un programa macroeconómico populista; sin embargo, y a pesar de todo, faltó la capacidad de organizar, aunque sea simbólicamente, el "pueblo", proceso en gran parte obstaculizado por la crisis del vínculo social.

Las principales dificultades del Perú contemporáneo (más allá de sus desequilibrios estructurales -extensión del sector informal, limitación de la política fiscal, déficit de la balanza de pagos, crisis del modelo de acumulación-) deben ser interpretadas sobre el telón de fondo de la herencia incompleta de las experiencias nacional-populares. A esto hay que añadir la celeridad con la cual A. Fujimori logró, en pocos años, liquidar el legado nacional-popular (en lo que se refiere al

eclipse del partido Aprista, la desactivación de las medidas impuestas por el gobierno militar²⁰ y la reducción de la presencia del Estado en la economía), que contrasta fuertemente con la permanencia y la resistencia del modelo nacional-popular en otros países que conocieron efectivamente el verdadero triángulo nacional-popular, como es el caso de la Argentina²¹. Sin embargo, la búsqueda reiterada de una ecuación nacional-popular en el Perú, reenvía al vínculo que los actores establecen entre los problemas de la sociedad peruana y las promesas del triángulo nacional-popular.

Por supuesto, muchos países del continente conocen las dificultades ligadas a la tensión existente entre los imperativos de la economía y aquellos de la integración social. La inserción de América Latina dentro del nuevo orden económico internacional es, sin duda, problemática. El agotamiento del modelo sustitutivo de importaciones cuestiona severamente la naturaleza de la incorporación del continente en la economía globalizada. La reducción de la importancia de las materias primas para las nuevas tecnologías y la circulación creciente de los capitales entre los países del hemisferio norte, interpelan la vigencia del valor económico de las fronteras nacionales. Por otro lado, y en medio de la ola de democratización, se abre o se profundiza, según los casos nacionales, la brecha social entre los sectores integrados de la sociedad y los sectores excluidos, en movilidad social descendente, o marginales. Pero estos problemas son tratados de diferentes modos en función, no sólo de las capacidades económicas sino también de la historia sociopolítica de cada país. Es en este sentido que nos referimos a la especificidad del caso peruano, en la medida en que las dificultades actuales poseen una agudeza desconocida en otros países. Estas pueden ser resumidas esquemáticamente en cuatro puntos:

1. En primer lugar, la crisis del orden oligárquico en el Perú no dio lugar a la emergencia de una burguesía nacional capaz de controlar los procesos políticos. Por supuesto, esta evolución guarda relación con el grado de autonomía económica del país, cuyo desarrollo dependiente no se realizó bajo el control de una burguesía nacional sino en una sociedad de enclave (Cardoso y Faletto, 1969). El capital extranjero penetró la estructura social sin alterarla, se apoyó incluso sobre grupos precapitalistas como los grandes terratenientes y la burguesía comercial, que de esta manera se convirtieron en clientes de las empresas extranjeras. Proceso que, como hemos recordado, jugó en reiteradas oportunidades un papel importante en la justificación de las

²⁰ Incluso en sus aspectos más simbólicos, como los referidos a la reforma agraria.

²¹ Por supuesto, la crisis y el dismantelamiento del modelo nacional-popular es una nota común que comparten diferentes países latinoamericanos. Sin embargo, en el caso argentino, a pesar de la radicalidad del programa neoliberal implementado por la administración de C. Menem, el peronismo continúa siendo en los sectores populares un marco de inteligibilidad de lo social. (Cf. Martuccelli y Svampa, 1997).

intervenciones económicas de los partidarios del modelo nacional-popular. Sin embargo, el carácter trunco de las experiencias nacional-populares no permitió la consolidación de un grupo dominante capaz de organizar políticamente la sociedad. El Perú asistió así a un cambio de la estructura y de la distribución del poder, luego del desplazamiento de las familias terratenientes tradicionales, sin que un pacto de poder más amplio e integrador se estableciera entre los grupos dominantes y los sectores populares. Se formó una burguesía nacional más dinámica, compuesta de nuevos empresarios que crecieron al amparo del proceso de sustitución de importaciones, que diversificaron sus ingresos y establecieron nuevos acuerdos con los capitales extranjeros. Pero esta burguesía no logró consolidar e institucionalizar su poder a través del Estado, dada la debilidad del pacto nacional-popular. Por lo demás, la constitución de una tecnocracia gubernamental, tendencialmente heterogénea en su composición y extremadamente móvil en función de los cambios de gobierno, aumentó la inestabilidad de los sectores dominantes. Este proceso condujo a la volatilidad de las alianzas entre grupos económicos y a la vulnerabilidad de los sectores dominantes frente al capital extranjero. Tal es el caso bajo el gobierno de Fujimori, a partir del ingreso de nuevos grupos económicos, vinculados al capital extranjero de origen asiático (Demélas-Bohy y Lausent-Herrera, 1995). En suma, la inexistencia de un pacto nacional-popular capaz de establecer vínculos durables entre los sectores dominantes y el aparato estatal, se encuentra en la base de la inestabilidad y la porosidad de las élites.

2. El modelo nacional-popular, a pesar de sus limitaciones, tendió a favorecer un tipo particular de articulación entre los individuos y sus instituciones, permitiendo que éstas fueran experimentadas como "propias". La incompletitud de los regímenes nacional-populares agudizó la crisis de las instituciones republicanas. En el fondo, el problema remite al divorcio fundacional entre masas y élites que existe desde la época de la independencia, etapa en la cual se consolidó el pesimismo de las élites respecto del pueblo. Ciertamente es que, desde el punto de vista formal, la legitimidad reposaba en la soberanía popular (aún en sus formas más restrictivas, como en los regímenes censitarios). Sin embargo, la república real estaba más cerca de la representación social de las élites, para quienes la persistencia del "arcaísmo" de las masas, atávicas en sus creencias y lábiles en sus inclinaciones políticas, tornaba imposible la fundación del vínculo político desde el "pueblo". Un divorcio que sólo fue parcialmente superado en algunos países, sobre todo a través de regímenes nacional-populares, que permitieron, aun de manera relativa, el desarrollo de una estrategia económica mercado-internista basada en la expansión del consumo de los sectores populares así como en su inserción en el aparato del Estado, gracias a modelos de cooptación corporativos. Las experiencias trucas del Perú acentuaron este divorcio, manifiesto patéticamente

en períodos de excepción, como es el caso del apoyo otorgado al golpe de Fujimori en abril de 1992 (Rosa Balbi, 1992).

3. El modelo nacional-popular, aun cuando tendió a subordinar los actores sociales al líder, fue también el gran "creador" de los cuerpos intermedios en América Latina. Así, las experiencias nacional-populares trucas del Perú testimonian la formidable desagregación de las acciones colectivas. Los sindicatos, que se habían fortalecido durante los años setenta y mediados de los ochenta, a través de los efectos indeseados aunque inducidos por la política nacional-popular del gobierno militar, entran en descomposición, sin que este "vacío" organizativo sea paliado por otras formas de movilización popular. Pero el modelo nacional-popular, aun con sus contradicciones políticas,²² permitió la constitución de identidades y de lealtades partidarias durables. En el caso peruano, la herencia de estas tres experiencias trucas dio lugar a una ausencia casi total de institucionalización del sistema de partidos políticos y, tras la erosión de la "mística" aprista, a la casi desaparición de toda estabilidad electoral. La desafección de los ciudadanos respecto del sistema político se expresó, en un primer período, a través del voto hacia los partidos anti-establishment (sobre todo entre 1978 y 1986, hacia los partidos de izquierda) desplazándose, en un segundo período, hacia líderes extrapartidarios y ajenos al campo político (Vargas Llosa, Fujimori, los recientes alcaldes de Lima), antes de dar lugar a una dispersión electoral y a toda permanencia institucional, hecho que deposita una enorme capacidad de decisión en manos del ejecutivo (O'Donnell, 1992). Como lo muestran Mainwaring y Scully, el Perú posee en la actualidad uno de los sistemas de partido menos institucionalizado de América Latina (1995, p.17).

4. Por último, a pesar de las fuertes disparidades existentes a este respecto, en América Latina los regímenes nacional-populares afianzaron un sentimiento nacional, a través de la extensión de derechos sociales y gracias a la participación, real y simbólica, en la vida política. Las experiencias nacional-populares trucas del Perú, en la medida en que no permitieron superar las divisiones internas del país (regionales, sociales, étnicas), a través de un proyecto de cohesión nacional, han dado paso, también en este rubro, a una fuerte crisis: en la actualidad, la identidad nacional aparece como particularmente endeble. Así, el control de la economía por la burguesía nacional, a la vez, débil y transitorio, así como la insuficiencia del Estado por asegurar la cohesión social, se traducen por una crisis profunda de la identidad nacional.

²². Estas contradicciones se hallan ligadas al déficit de democracia política de los regímenes nacional-populares, marcados tanto por sus tendencias unanimistas, como por sus denuncias (al menos, en su origen) de los límites del sistema de representación partidaria.

En resumen, muchas de las principales dificultades actuales de la sociedad peruana deben interpretarse en la *longue durée*, sobre el telón de fondo de tres experiencias nacional-populares trucas, lo cual evidencia tanto el carácter histórico como la profundidad de los problemas que el Perú atraviesa a finales del siglo XX.

Bibliografía

Actualidad Económica, número especial sobre "Economía peruana, 1950-1988", Año XII, n°113, Febrero 1990.

C. A. Astiz y J. Z. García, "El ejército peruano en el poder", *Aportes*, n°26, octubre 1972, pp.7-30.

P. Birnbaum, *Le peuple et le gros*, Paris, Pluriel, 1979.

F. Bourricaud, *Pouvoir et société dans le Pérou contemporain*, Paris, Armand Colin, 1967.

F. Bourricaud, "Los militares: ¿por qué y para qué?", *Aportes*, n°16, abril 1970, pp. 13-55.

D. Carbonetto, *La fortaleza de los débiles*, Ed.del Cedep, Argentina, 1990.

F. H. Cardoso y E. Faletto, *Dependencia y desarrollo en América Latina*, México, Siglo XXI, 1969.

M. Castillo Ochoa, *La escena astillada (crisis, acumulación y actores sociales)*, Lima, Cuadernos Desco, 1992.

J. Cotler, *Clase, Estado y nación en el Perú*, Lima, IEP, 1978.

J. Cotler, "Democracia e integración nacional en el Perú", in C.McClintock y A.F.Lowenthal (comp.), *El gobierno militar*, Lima, I.E.P., 1985, pp.23-62.

I. Degregori, C. Blondet, N. Lynch, *Conquistadores de un mundo*, Lima, IEP, 1986.

M.-D. Demélas-Bohy y I. Lausent-Herrera, "Pérou: le pouvoir selon Fujimori", *Problèmes d'Amérique Latine*, n°19, octubre-décembre 1995, pp.3-25.

T. Di Tella, G. Germani, O. Ianni, *Populismo y contradicciones de clase*, México, Era, 1973.

R. Dornbusch y S. Edwards, *Macroeconomía del populismo en América Latina*, México, FCE, 1990.

T. Dos Santos, *Socialismo o fascismo*, Santiago, PLA, 1972.

F. Durand, *La burguesía peruana. Los primeros industriales. Alan García y los empresarios*, Lima, Desco, 1988.

E. V. K. Fitzgerald, *La economía política del Perú, 1956-1978*, Lima, I.E.P., 1981.

A. Flores Galindo, *Buscando un Inca: identidad y utopía en los Andes*, La Habana, Casa de las Américas, 1986.

A. García, *El futuro diferente*, Editorial EMI, 2da ed.1987.

A. García, *A la inmensa mayoría, Discursos*, 2 vol., Editorial EMI, s/d.

G. Germani, *Política y sociedad en una época de transición*, Buenos Aires, Paidós, 1962.

J. Gölte y N.Adams, *Los caballos de Troya de los invasores*, Lima, IEP, 1987.

R. Grompone, *El velero en el viento*, Lima, IEP, 1991.

L. Guasti, "El gobierno militar peruano y las corporaciones internacionales", en C. McClintock y A. F. Lowenthal (comp.), *El gobierno militar*, Lima, I.E.P., 1985, pp.207-230.

V. Haya de la Torre, *Aprismo y filosofía*, Lima, Ediciones El Pueblo, 1961.

V. Haya de la Torre, *El Antiimperialismo y el Apra*, Ediciones LYDEA, Lima, 1986.

V. Haya de la Torre, *Treinta años de aprismo*, Editorial Monterrico, Lima, 1986.

O. Ianni, *O colapso do populismo no Brasil*, Rio de Janeiro, Civilizaçao Brasileira, 1968.

P. Klaren, *La formación de las haciendas azucareras y los orígenes del APRA*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1970.

R. Lago, "La ilusión de una redistribución por medio de la política macroeconómica. La experiencia heterodoxa del Perú (1985-1990)", en R. Dornbusch y S. Edwards, *Macroeconomía del Populismo en América Latina*, México, FCE,1993, pp.301-368.

S. López, "Fujimori y la crisis de la civilización del siglo XX", *Punto crítico*, nº3, 1992, pp.5-11.

S. Mainwaring y T. R. Scully, "Introduction. Party Systems in Latin America" en S. Mainwaring y T. R. Scully (eds.), *Building Democratic Institutions. Party Systems in Latin America*, California, Stanford University Press, 1995, pp.1-34.

D. Martuccelli y M. Svampa, "La doble legitimidad del populismo", *Proposiciones*, nº22, 1993, pp. 226-238.

D. Martuccelli y M. Svampa, *La Plaza Vacía. Las transformaciones del peronismo*, Buenos Aires, Losada, 1997.

J. Matos Mar, *Desborde popular y crisis del Estado*, Lima, IEP, 1984.

W. E. Mühlmann, *Messianismes révolutionnaires du tiers monde*, Paris, Gallimard, 1968.

L. North, "Orígenes y crecimiento de Partido Aprista y el cambio socioeconómico en el Perú", *Desarrollo Económico*, vol.X, nº38.

L. North, "Orientaciones ideológicas de los dirigentes militares peruanos" en C. McClintock y A. F. Lowenthal (comp.), *El gobierno militar*, Lima, I.E.P., 1985, pp.271-299.

- G. O'Donnell, "Democracia delegativa?", *Cuadernos del CLAEH*, n°61, 1992.
- J. Parodi, "*Ser obrero es algo relativo...*", Lima, I.E.P., 1986.
- F. Portocarrero, "El Estado y el capital internacional en el Perú", *Revista Mexicana de Sociología*, Año XL, vol.XL, n°3, julio-septiembre 1978, pp.977-989.
- A. Rouquié, *El Estado militar en América Latina*, Buenos Aires, Emecé, 1984.
- U. Schirmer, "Reforma agraria y cooperativismo en el Perú", *Revista Mexicana de Sociología*, vo.XXXIX, n°3, julio-septiembre 1977, pp.799-856.
- D. M. Schydlosky y J. Wicht, "Anatomía de un fracaso económico", en C. McClintock y A.F Lowenthal (comp.), *El gobierno militar*, Lima, I.E.P., 1985, pp.119-170.
- B. Stallings, "El capitalismo internacional y el gobierno militar peruano", en C. McClintock y A. F. Lowenthal (comp.), *El gobierno militar*, Lima, I.E.P., 1985, pp.171-206.
- A. Stepan, *The State and Society: Perú in Comparative Perspective*, Princeton, Princeton University Press, 1978.
- D. Sulmont, *El movimiento obrero peruano (1890-1980)*, Lima, Tarea, 1980.
- R. Thorp, "Evolución de la economía peruana" en C. McClintock y A.F.Lowenthal (comp.), *El gobierno militar*, Lima, I.E.P., 1985, pp.63-86.
- R. Thorp, "Trends and cycles in the peruvian economy", *Journal of Development Economics*, n° 27, 1987, pp.355-374.
- A. Touraine, *La parole et le sang*, Paris, Odile Jacob, 1988.
- M. Trillo y J. Vega, "Gasto publico, tributación, déficit fiscal e inflaion en el Perú, 1970-1988", *Economía*, vol.XII, n°23, junio 1989, pp.59-81.
- I. Vega Centeno, *Aprismo popular. Cultura, religion y política*, Lima, Cisepa Puc, 1991.
- R. Webb y A. Figueroa, *Distribución del ingreso en el Perú*, Lima, I.E.P., 1975.
- F. Weffort, *O populismo na política brasileira*, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1978.
- S. Zermeño, "El regreso del líder: crisis, neoliberalismo y desorden", *Revista Mexicana de Sociología*, Octubre-Diciembre 1989, pp.115-150.